

Ricardo Fenner Vargas*

La crisis política interna de la Unidad Popular (1970-1973)

I. *Funcionamiento del sistema demo-burgués hasta 1970*

1. *Una explicación previa sobre la situación actual en Chile*

Con la sola lectura diaria de la prensa es posible percatarse cabalmente de la represión bárbara que sufre el pueblo de Chile; también son útiles a ese respecto los informes de las Comisiones Investigadoras sobre el Estado de los Derechos Humanos en Chile que han sido suficientemente explícitas: asesinatos en masa de población civil, torturas que repugnan a la conciencia de todo ser medianamente civilizado, represión de toda posibilidad de expresar ideas sin el consentimiento oficial, conculcación de los más elementales derechos humanos, unido todo esto a una política económica que tiene sumido en el hambre y la miseria al pueblo chileno.

No obstante, esta política represiva y antipopular que exhibe la Junta Militar y su ideología fascista,¹ no pueden ser atribuidas a la "voluntad maligna" de los propios militares o a la existencia de un "odio de clases" de las

* Licenciado en Derecho (Facultad de Derecho de la Universidad de Chile), Master en Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

¹ La ideología fascista de la Junta de Gobierno ha quedado claramente expuesta en su "Declaración de Principios", emitida el 10 de marzo de 1974, en la cual se declara que "resulta imperioso cambiar la 'mentalidad de los chilenos e inspirar un nuevo y gran movimiento cívico-militar'" (*Excelsior*, 12 de marzo de 1974; cables de AP y LATIN). Al mismo tiempo se exalta la nacionalidad al declarar como objetivo fundamental de la Junta de Gobierno, el hacer de Chile "una gran nación", y quienes "conspiran" en contra de esa unidad nacional, son las "ideologías foráneas, el sectarismo partidista, el antagonismo deliberado ante las clases sociales y la invasión cultural extranjerizante". Se afirma también que la Junta "ejercerá con energía el principio de autoridad, sancionando enérgicamente todo brote de indisciplinas o anarquía, y que se colocará por encima de todo grupo particular" (*Excelsior*, 12 de marzo de 1974; AP y LATIN).

Encontramos aquí principios chauvinistas, xenofobia y el intento de constituir un Estado que, colocándose aparentemente por encima de las clases, elimine toda manifestación política en beneficio de la burguesía y el imperialismo norteamericano.

fuerzas reaccionarias, sino que tiene una explicación *histórica*; la cual podemos encontrar en las características que asume la crisis política durante la coyuntura del gobierno de Allende. En otras palabras, si bien es cierto que existe un odio de clases de la burguesía en contra del proletariado y la ideología fascista de los altos mandos de las fuerzas armadas está presente, manifestándose en la represión brutal que hoy en día sufre el pueblo de Chile, no es menos cierto que ésta debemos explicarla mediante un análisis de la lucha de clases que se desarrolló durante la coyuntura del gobierno de la Unidad Popular.

Efectivamente, son los cambios profundos que el gobierno de la Unidad Popular realiza en la estructura económica, los que provocan la reacción de la burguesía y el imperialismo norteamericano que se traducirán, posteriormente, en el golpe de Estado, el cual es precedido de un enervamiento de la lucha de clases nunca visto en Chile. Se puede aseverar, entonces, que la violencia contrarrevolucionaria que aplica la Junta Militar es proporcional a la intensidad del proceso de cambios estructurales que intenta realizar el gobierno del presidente Allende.

Pero no son solamente estos cambios los que más alarmaron a la burguesía. También el formidable levantamiento popular que los acompaña convence a las fuerzas reaccionarias de lo fútil que resultaba el aparato jurídico-estatal de corte democrático para su apaciguamiento. Necesitaba entonces la burguesía desechar, por inservible, todo el andamiaje político que trabajosamente había construido en 40 años de vida constitucional, para remplazarlo por otro más útil a las nuevas circunstancias históricas que la Unidad Popular había contribuido a forjar con su acción: un Estado de excepción de características fascistas que asegura la continuación de su dominio económico y político.

2. *Características del Estado chileno hasta 1970*

¿Cuáles eran las características del Estado chileno hasta antes del gobierno de Allende y en qué se apoyaba?

Visto más de cerca el problema, el Estado capitalista chileno, hasta antes que asumiera el gobierno Salvador Allende, era un perfecto mecanismo regulador de las contradicciones de clases y un tipo ideal de democracia burguesa en el Continente suramericano. Con un Poder Ejecutivo que, si bien tenía atribuciones amplias en materias económico-administrativas, estaba dominado por un parlamento en el cual nunca tuvo el gobierno en turno mayoría suficiente para gobernar prescindiendo de él.² De esta manera, se puede decir que existía un equilibrio de poderes en el seno del aparato del Estado.

² Y esto, por la forma en que se renovaba el Parlamento. Así, el Senado (instancia superior del mismo) lo hacía siempre parcialmente, de tal manera que la mayoría relativa o absoluta que elegía un nuevo presidente de la República nunca podría representarse en la misma proporción en el Senado, puesto que éste cada cuatro años

En realidad, el equilibrio de poderes enmascaraba una dominación del conjunto de las clases burguesas sobre el proletariado. Para ejercer esta dominación, todas las fracciones de la burguesía (industrial, agraria y latifundista, financiera y comercial) necesitaban participar en el control del aparato estatal por medio de sus partidos políticos, dado que, a través de éste, se repartían importantes cuotas del excedente económico chileno; principalmente los ingresos provenientes del enclave minero norteamericano. Además, el Estado controlaba actividades importantes relacionadas con la agricultura, industria y minería, teniendo fuerte ingerencia en la regulación económica (fijando precios, regulando el comercio exterior, legislando en materias tributarias, etcétera).

Para que en este control sobre el Estado tuvieran participación todos los grupos sociales burgueses, era necesario contar con cierta estabilidad institucional y, sobre todo, con un equilibrio de poderes que evitara la hegemonía de una fracción de la burguesía sobre las otras en el aparato del Estado. De allí que cuando un partido burgués (o un grupo de partidos) lograba ganar las elecciones presidenciales y ser gobierno, necesitaba del concurso del Congreso para aplicar su programa, debido a que era imposible que contara con mayoría absoluta en él por la forma parcial en que éste se renovaba. Resultaba así una gestión gubernamental producto del consenso político de todos los partidos, la cual no podía afectar; en lo sustancial, los intereses de las distintas fracciones de la clase dominante, sin perjuicio de las fricciones que alguna medida de gobierno o la aplicación concreta de una ley por el Ejecutivo podía crear, como fue el caso de la Reforma Agraria impulsada durante el gobierno de Eduardo Frei.

Con lo anterior no queremos decir que la burguesía no tuviera contradicciones en su seno. Por el contrario, las contradicciones económicas (producto de diferentes proyectos de desarrollo económico, como veremos más adelante) interburguesas son importantes y van a dar origen, ante la agudización de la contradicción principal de clases entre burguesía y proletariado, a una crisis de dominación burguesa que se traducirá, más tarde, en el triunfo electoral de la Unidad Popular. Lo que afirmamos es que estas contradicciones son parcialmente resueltas, hasta 1970, en el seno del aparato del Estado capitalista, mediante el juego parlamentario de partidos y las relaciones del Parlamento con el Poder Ejecutivo.

3. Papel de los partidos obreros en el sistema capitalista

Es importante destacar el papel que desempeñaban los partidos marxistas en este proyecto de dominación capitalista.

Los partidos Comunista y Socialista, ante la solidez que la burguesía es capaz de imprimirle al funcionamiento del Estado (basado en una ideología

cambiaba sólo la mitad de sus miembros en ejercicio y el gobierno, por lo tanto, sólo podía obtener, para su causa, una porción de esta mitad de miembros electos.

cuyo valor principal es el respeto a la legalidad que lo reglamenta), deciden encuadrar su acción política dentro de los márgenes de esa legalidad. Pretenden, mediante la acción parlamentaria y sindical, presionar al sistema político burgués en pro de reformas beneficiosas para la clase obrera.

Tampoco *trepidan* en incorporarse, a partir de 1938, a gobiernos con hegemonía burguesa y de políticas desarrollistas. Colaboran así durante todo el gobierno de Pedro Aguirre Cerda (Frente Popular de 1938), por un breve periodo en el siguiente de Juan Antonio Ríos. También lo hacen en el de González Videla (participación que terminó bruscamente al aprobarse por el Parlamento, a iniciativa del propio presidente, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia en 1947, la cual declaró políticamente proscrito al Partido Comunista); igualmente, el Partido Socialista Popular (fracción del Partido Socialista, a la sazón dividido), se incorporó por algunos meses al gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo. Pero estos periodos de incorporación a las tareas de gobierno burgueses eran seguidos por movimientos represivos en contra de la clase obrera. El único gobierno que contó durante todo su mandato con la presencia socialista y comunista fue el del Frente Popular de Pedro Aguirre Cerda.

Hay que hacer notar, en todo caso, que esta incorporación periódica a labores de gobierno y la permanente actividad parlamentaria y sindical, permiten ir afianzando para los trabajadores conquistas sociales importantes: leyes sociales y la generación paulatina de una organización sindical fuerte y *afiatada*. Sin embargo, el beneficio político chileno, por parte de los partidos marxistas, no se hizo extensivo a todas las clases explotadas; en realidad, sólo abarcó a la clase obrera incorporada a las industrias de cierta importancia económica. De este modo, los obreros que trabajaban en la pequeña industria, los campesinos, asalariados agrícolas, los migrantes en el campo y asalariados incorporados a los servicios, así como los pequeños trabajadores por cuenta propia, incapaces de organizarse para hacer valer sus demandas, no vieron nunca los beneficios de esta *incorporación-presión* de los partidos marxistas al sistema político burgués. En la práctica, estos sectores sociales pagaron con la explotación inmisericorde de que fueron víctimas el equilibrio político relativo de la formación social chilena en 40 años de historia.

Cuando la Unidad Popular asume el Poder Ejecutivo del Estado chileno y aplica, consecuentemente con su ideología, las reformas estructurales adecuadas para modificar las relaciones de producción capitalistas, este equilibrio constitucional se hace añicos, generando un proceso de agudización de la lucha de clases que podía terminar en un enfrentamiento armado (guerra civil) o en un golpe de Estado y su corolario: dictadura militar con características fascistas.

4. Fuerzas sociales que representan los partidos chilenos

Para explicarse cómo se abre la posibilidad histórica del triunfo del candidato popular, Salvador Allende, en 1970, es necesario hacer un breve diag-

nóstico social, a partir de los partidos políticos y en relación a las fuerzas sociales que representan. Esto nos llevará a replantearnos el papel de los partidos de izquierda en la reproducción de las características del Estado capitalista chileno.

En el espectro de los partidos políticos chilenos,³ el Partido Nacional (surrido de la alianza de liberales y conservadores en 1965), era el típico exponente de la burguesía agraria-latifundista y sectores industriales; electoralmente también se nutría de capas medias: comerciantes, pequeños industriales y profesionales de altos ingresos.

Más a la izquierda se encontraba el Partido Demócrata Cristiano, representante de sectores burgueses ligados estrechamente al capital extranjero y cuyas empresas, desde un punto de vista productivo, constituían las más "dinámicas" de la economía chilena.⁴ Al mismo tiempo, la Democracia Cristiana encontraba acogida en los grupos burocráticos estatales, ligados a estas empresas modernas en el proceso productivo ("tomando en cuenta que más del 70 por ciento de la inversión total del país se hace por vía del gasto público"), y en vastos sectores de la clase obrera y campesinos beneficiados por la reforma agraria, iniciada por el gobierno demócratacristiano de Eduardo Frei. Aparece esta colectividad política, en cuanto a su composición social y a su lectorado, como un partido pluriclasista, pero cuya política va a beneficiar a los grupos de presión más fuertes; es decir, la burguesía monopólica en actividades preponderantemente fabriles de gran productividad. Estas industrias "modernas" crecen "entre 1960-65 a un promedio de un 10.8 por ciento, mientras que las tasas correspondientes a los sectores de bienes no durables e intermedios (empresas tradicionales) son de un 4.6 por ciento y 8.4% respectivamente".⁵ Estos sectores "burgueses modernos", aliados al capital extranjero,⁶ son los hegemónicos en la política seguida por la Democracia Cris-

³ Respecto a la relación de los partidos políticos y las clases sociales, véase el trabajo de Enzo Faletto y Eduardo Ruiz: "Conflicto Político y Estructura Social", en *Chile Hoy*, México, Siglo XXI, pp. 213 y ss.

⁴ La caracterización del Partido Demócrata Cristiano que hacen Faletto y Ruiz, *op. cit.*, basándose en la votación de este partido por provincias (lo que asocia al partido con el tipo de actividades predominantes en cada una de ellas), es la siguiente: "La democracia cristiana representaría una burguesía industrial moderna", es decir, aquellos sectores que emergen con la expansión vertiginosa de la siderurgia, la construcción, la petroquímica y con todo el complejo industrial, comercial y financiero que orienta su proceso a la producción y mantenimiento del mercado de bienes de consumo duraderos. "Este tipo de expansión, necesariamente, ha requerido una consecuente política fiscal. Si advertimos que al menos el 70 por ciento de la inversión total en el país se hace por la vía del gasto público, lo cual ha implicado una modernización de la actividad estatal y, por consiguiente, de sus cuadros administrativos, generando una burocracia modernizada que se ubica especialmente en los grandes centros urbanos industriales, y que también expresa su participación política a través de la democracia cristiana.", p. 224.

⁵ Ruiz y Faletto, *op. cit.*, p. 228.

⁶ Respecto a la penetración extranjera en la industria chilena, véase Aranda y Martínez, en *Chile hoy*, México, Siglo XXI, p. 83, donde se afirma, citando un estudio de Oscar Garrón y J. Cisternas, que "el 63.7 por ciento de las empresas constituidas

tiana durante su gobierno, y en la que adopta la burguesía como clase, posteriormente, ante la Unidad Popular.

El otro partido pluriclasista en su composición social es el Radical, representante de una burguesía agraria y minera, pero también de una burocracia no vinculada a actividades productivas⁷ y sectores medios, en general, relacionados con actividades tradicionales. Las tensiones internas, durante el gobierno popular, provocarán su división en tres sectores, de los cuales sólo uno se adhirió a la política gubernamental de la UP.

Los otros dos grandes partidos políticos son el Comunista y el Socialista. Ambos de declarada ideología marxista y representantes de la clase obrera en su conjunto (con la excepción de las bases proletarias demócratas cristianas). La coexistencia de dos grandes agrupaciones políticas marxistas se puede explicar *por la existencia de dos proyectos políticos diferentes* que se perfilan a fines de la década del 50 y por el hecho concreto de que cada uno de ellos representaba intereses de *distintos sectores sociales al interior de la clase obrera*.

Efectivamente, si nos basamos en el mismo trabajo citado se puede percibir que el Partido Comunista tiende a incrementar su votación y recluta adherentes en las zonas industriales donde predominan actividades calificadas como "modernas"; es decir, proletariado con ingresos supuestamente más altos, en la medida que laboran en industrias de mayor productividad que las tradicionales. Constituyen, por lo tanto, capas obreras en alguna medida mejor remuneradas que otras.

En cambio, el Partido Socialista reclutaría masas obreras vinculadas a "actividades tradicionales" y que sufrirían, en un grado mayor, los rigores de la explotación capitalista, debido a que en sus salarios se reflejaría el menor ritmo de crecimiento de estas empresas en relación a las "modernas" (incluimos junto a los obreros tradicionales a los de la pequeña minería y a los campesinos). También el Partido Socialista se nutriría de obreros y funcionarios públicos vinculados a servicios estatales menos favorecidos en cuanto a salarios, tales como la salud y educación.⁸ Esta característica podría explicar la mayor radicalización socialista respecto al Partido Comunista, la cual se perfila nítidamente durante toda la década del 60 y en el gobierno de la Unidad Popular. Al respecto dicen Ruiz y Faletto:

El Partido Socialista aparece con rasgos muy especiales, por una parte se vincula a sectores sociales que de alguna manera sufren formas de expulsión y desplazamiento producidas naturalmente por la mayor concentración económica. En cierta forma, se adscriben a actividades económicas más tradicionales. Sin embargo, además, postula la representación de las concepciones más radicales que se plantean en la política contingente nacional. Se supondría que esta política como partido la asume como forma de reflejar las reivindicaciones de los sectores menos favorecidos por el des-

en sociedades anónimas están controladas en más del 51 por ciento por capital extranjero".

⁷ Véase Ruiz y Faletto, *op. cit.*, p. 215.

⁸ Ruiz y Faletto, *op. cit.*, p. 225.

arrollo económico, contingencias que al parecer contribuyen a su radicalización.⁹

5. *Diferencias estratégicas de socialistas y comunistas*

No es de extrañarse, entonces, que los dos partidos marxistas tuvieran diferencias estratégicas fundamentales frente a la acción política a seguir en Chile para la conquista del poder. El Socialista basaba su táctica en la estrategia denominada "Frente de Trabajadores", que consistía en una alianza de clases, compuesta por el conjunto de los obreros, campesinos y pequeña burguesía asalariada, *excluyendo cualquier alianza estratégica con partidos representantes de la burguesía*, entre los cuales se contaban los partidos Demócrata Cristiano y Radical. Se partía del supuesto de que tanto la burguesía "moderna" como la "tradicional" estaban fuertemente penetradas por el capitalismo extranjero, no existiendo una burguesía nacional que tuviera intereses contradictorios con una oligarquía aliada al capital foráneo, como postulaban los comunistas. La aplicación de esta línea impidió, en 1964, cualquier entendimiento electoral con la Democracia Cristiana, partido que en esa ocasión aglutinó a las fuerzas derechistas para derrotar al candidato popular Salvador Allende.

El Partido Comunista, por su parte, se planteaba por la constitución de un "Frente Popular", con inclusión de partidos que veían como representantes de una burguesía "nacionalista" (principalmente el Radical y sectores de la Democracia Cristiana) en contradicción a la burguesía monopólica y terrateniente, que estaría ligada al imperialismo extranjero. La revolución se concebía de este modo por etapas: la primera sería la "democrática burguesa", destinada a modernizar la estructura económica, eliminando los residuos del feudalismo en el campo, por una parte, y el carácter monopólico dependiente de la economía, por la otra. La segunda etapa consistiría en la construcción de una sociedad socialista a partir de la primera.

Pero, habiendo sido elaborada la línea del "Frente de Trabajadores" por los socialistas, sólo a mediados de la década del 50, antes de esa fecha, desde los años 30 hasta 1953, *ambos partidos colaboran en gobiernos democráticos burgueses* y, de este modo, se incorporan a labores gubernamentales propias del funcionamiento del Estado capitalista chileno.

Así, como ya lo señalamos, colaboran en el gobierno del Frente Popular (Pedro Aguirre Cerda) y participan por un breve periodo en el de Juan Antonio Ríos y Gabriel González Videla; asimismo hay colaboración por poco tiempo en el gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo. Y aunque esta colaboración no es permanente en cada uno de los gobiernos (a excepción del Frente Popular) y va seguida de represión contra la izquierda, es necesario destacarla, pues significa un *comportamiento político específico* de las vanguardias de izquierda chilena frente a la *problemática del poder*.

⁹ *Op. cit.*, p. 226.

6. Los partidos obreros carecen de una política de poder

En este comportamiento, del cual es posible resumir el intento de formar *frentes populares, lucha parlamentaria y actividad sindical*, importan dos hechos de importancia extraordinaria desde el punto de vista ideológico y de las consecuencias políticas que acarrea:

En primer lugar, política para que las masas, seguidoras de esas vanguardias, tiendan a olvidar una enseñanza fundamental del marxismo leninismo, a saber: *que el objetivo esencial de la lucha de clases revolucionaria es la destrucción del Estado capitalista para ser remplazado por la dictadura del proletariado.*

En efecto, el hecho indiscutible de que los partidos marxistas chilenos tiendan a desarrollar toda su acción política *dentro de los márgenes de la legalidad*, ciñéndose a la lucha parlamentaria, la acción sindical e intenten colaborar en gobiernos burgueses (para resucitar el Frente Popular de 1938), implica un desapego de las acciones de agitación contra el poder burgués. Con esto no se arremete en contra del parlamentarismo y contra toda alianza táctica con fracciones de la burguesía, en momentos en que las condiciones las hacen necesarias; a lo que se alude, en el caso de Chile, es que la izquierda, por actuar en conformidad con la legalidad capitalista y encuadrar su política dentro de los márgenes del sistema político burgués, olvidó la problemática central del partido marxista; es decir, preparar a las masas para el asalto al poder, mediante la destrucción del Estado, llegado el momento en que se dieran las condiciones para ello.

El olvido de esta problemática significó, concretamente, el dominio en la clase obrera de una ideología que, si bien es marxista en la fraseología que se expresa, en la práctica está *teñida de desviaciones socialdemócratas*, en la medida que escabulle en la acción el problema central y objetivo final de la lucha revolucionaria: la *conquista del poder por el proletariado.*

Este predominio de una práctica política encauzada en la legalidad burguesa, y que no atenta contra el sistema capitalista en lo fundamental, desarrollada por la izquierda hasta mediados de la década del 60 (en el gobierno de Frei aparecen pequeños brotes de lucha insurreccional desligados de las masas y muy incipientes), contribuye a la reproducción de una *ideología legalista y desarrollista* fomentada por la burguesía, la cual en definitiva sostiene al Estado y ayuda, de este modo, a la reproducción de las relaciones de producción capitalistas que fortalecen a la burguesía como clase dominante.

Claro que, por otro lado y en segundo lugar, el proletariado pudo, en esta relativa coexistencia pacífica con la burguesía, desarrollar un movimiento sindical poderoso y, al mismo tiempo, extender su influencia política a amplios sectores de clases medias. Así como permitió que los partidos marxistas crecieran en militantes y se robustecieran electoralmente con la propaganda de sus programas y la acción sindical y parlamentaria. El conjunto de estos factores redundó en una presión sobre el Estado, para que éste accediera a demandas de mayor participación política y beneficios sociales para los trabajadores organizados. En cambio, los trabajadores, sin capacidad para orga-

nizarse, y los campesinos y asalariados agrícolas y otros sectores sociales explotados, se vieron privados de los beneficios de la presión de izquierda sobre el sistema político, en la medida que esta misma izquierda participante tendió a desestimar su importancia como fuerzas sociales revolucionarias. Para corroborar lo anterior baste sólo un ejemplo: la Ley de Sindicalización Campesina sólo se aprobó a iniciativa del gobierno de Eduardo Frei en 1965; hasta esa fecha, a los asalariados agrarios no les estaba permitido en Chile formar sindicatos.

A pesar de los beneficios sociales y políticos que para un sector de la clase obrera chilena representa este *modo específico de hacer política* de los partidos marxistas, es bueno dejar en claro que en esta escuela política se fueron formando los dirigentes de izquierda que, más tarde, tendrían la responsabilidad de encauzar la práctica del gobierno de la Unidad Popular. Todos los errores y desviaciones (que sin duda tuvieron, como lo veremos más adelante) que se les puedan atribuir: economismo, reformismo legalista, falta de confianza en el poder de masas, etcétera, obedece a este hecho histórico: carencia de una política leninista en la cuestión del poder, lo que implica ausencia de partidos políticos con un mínimo de sentido insurreccional para la agitación y propaganda de una política revolucionaria, destinada a *remplazar, y por ende destruir, el aparato de Estado por uno socialista (dictadura del proletariado)*.

7. La izquierda es permitida dentro de la legalidad burguesa

En segundo lugar, esta participación en el sistema político burgués por parte de la izquierda marxista va a ser aceptada hasta cierto punto en forma complaciente por la burguesía, en la medida que es necesaria para el mantenimiento y reproducción del propio sistema de dominación. Además, dicha participación se desarrolla en los límites permitidos por la dominación capitalista. Tan es así que, cuando ésta se torna peligrosa para sus intereses no reparan en cortarla de raíz (el ejemplo más claro es la ilegalidad del Partido Comunista y su represión consiguiente en el gobierno de González Videla).

De este modo, mientras la participación de los partidos marxistas en la vida política-electoral esté controlada y normada por la legalidad burguesa, los sectores sociales burgueses y las clases medias que adhieren a su ideología, se acostumbran en Chile a ver casi como cosa natural el juego electoral de los partidos marxistas. Es tal vez por eso que casi no existe alarma de la burguesía cuando, a partir de 1958, los partidos Comunista y Socialista empiezan a presentar sus propios candidatos a las elecciones presidenciales, convenida, por otra parte, que era difícil que las ganaran. En 1964, sin embargo, la burguesía se vio obligada, para evitar el triunfo del candidato popular, a unificar sus fuerzas en torno a la figura de Eduardo Frei.

Resumiendo, podemos concluir que desde 1932 hasta 1970 la burguesía, en su conjunto, había logrado crear un sistema jurídico estatal basado en gobiernos de partidos que hemos denominado "pluriclasistas" (Radicales des-

de 1938 a 1952, el populista de Ibáñez de 1952 a 1958 y el Demócrata Cristiano de Eduardo Frei), los cuales, sin embargo, estaban dominados por sectores políticos de la burguesía. El único caso excepcional de un gobierno directamente controlado por la burguesía, es el del conservador Jorge Alessandri Rodríguez. Sin embargo, este sistema de dominación política contaba con la incorporación a él, por vía parlamentaria y, en algunos casos, de colaboración ministerial, de los partidos de izquierda. Tal situación implicaba, por parte de éstos, un acatamiento práctico del orden jurídico burgués, en la medida en que esta incorporación al sistema político chileno no era acompañada de una praxis destinada a socavarlo.

De manera que, políticamente hablando, la dominación capitalista en Chile, hasta 1970, se apoyaba principalmente en un punto: *el reconocimiento y acatamiento por todas las fuerzas políticas de derecha a izquierda de la legalidad burguesa vigente en Chile.*

Este acuerdo tácito de limitar la práctica política en los límites de la legalidad constitucionalmente establecida, es el que permite la *estabilidad democrática por más de 40 años*, de la cual tanto se enorgullecían los chilenos, llamando la atención del mundo entero, frente a la inestabilidad política y los sucesivos pronunciamientos militares de los países vecinos en Latinoamérica.

Así, lo jurídico estatal ocultaba perfectamente la dominación política-económica capitalista.

Evidentemente, cuando asume el gobierno Salvador Allende, este equilibrio político y la tan difundida legalidad ya no puede ser aceptada por las fuerzas burguesas, sobre todo al darse cuenta de la resolución de los partidos de la Unidad Popular de aplicar un programa que afectaba radicalmente sus intereses. Con el agravante, además, que junto a los partidos de la Unidad Popular se levantaba un pueblo con aspiraciones claras de jugar un papel preponderante en la transformación social.

Queda todavía por aclarar, antes de entrar al análisis de las causas inmediatas del golpe de Estado (es decir, los acontecimientos políticos ocurridos en el gobierno de Allende), cómo se produjo la coyuntura favorable al triunfo electoral de 1970. Se trata de verificar el porqué de la división electoral de fuerzas de la burguesía que permite el triunfo popular.

Ya hemos adelantado, al señalar cuáles eran las fuerzas sociales que representaban los distintos partidos políticos chilenos, la división que existía en el interior de la burguesía entre sectores "modernistas" y "tradicionales", respecto al desarrollo económico. División que se hace patente en la década de los 60.

Al asumir el gobierno Demócrata Cristiano Eduardo Frei, cuyo partido representaba a los sectores más modernos de la burguesía y que, por lo tanto, propiciaba un desarrollo capitalista basado en ciertos cambios en la estructura económica, se agudizan las contradicciones entre las distintas fracciones de la clase dominante.

En efecto, hacia 1964 Frei se propone una política de desarrollo económico que partía fundamentalmente de la ampliación de mercado, para asegurar la expansión de aquellas industrias y sectores relacionados con las fábricas

de productos de bienes de consumo durable. Esto significaba inevitablemente reformas internas (especialmente en el agro) para crear esos mercados. Se inicia así una reforma agraria y tributaria, que afectaría a la burguesía tradicional, principalmente a los sectores latifundistas y a los industriales que debían, mediante impuestos directos, contribuir a una paulatina distribución del ingreso.

Esta política modernizante, que va acompañada con intentos de movilización popular, se representa en el plano político como contradicciones entre el Partido Demócrata Cristiano, en el gobierno, y el Nacional, en la oposición, a tal punto, que el partido de Frei se ve obligado a echar pie atrás en sus más caras reformas, terminando por no aplicarlas, temeroso, incluso, de un golpe de Estado.¹⁰

El gobierno de Frei queda señalado por una contradicción flagrante entre el programa de la Democracia Cristiana y el de la derecha política, la cual se agudiza, incluso, cuando el candidato demócrata cristiano para las elecciones de 1970, Radomiro Tomic, anuncia una radical política de cambios económicos y sociales que, en lo esencial, no se diferencia mucho del programa de la Unidad Popular.

Al insistir Tomic en levantar su candidatura no le queda a la derecha otra vía que la de buscar su propio candidato: el octogenario Jorge Alessandri Rodríguez, ex presidente de la República (1958-1964).

Así, se dan las condiciones para que, dividida la burguesía por sus distintos proyectos de desarrollo económico, el candidato popular Salvador Allende gane la elección presidencial.

Éste triunfa con sólo el 36 por ciento de los votos, conseguidos principalmente entre los sectores obreros (industriales y mineros) y campesinos. Sólo un pequeño porcentaje se logra en la clase media. No hay, por lo tanto, en la votación de la Unidad Popular, un gran porcentaje de sufragios provenientes de los comerciantes, ni de los pequeños industriales, ni menos aún de los profesionales y de la burocracia estatal. No representó entonces la Unidad Popular una alianza entre la clase obrera y las capas medias. De ese hecho proviene la preocupación fundamental del gobierno de Allende para ganarse a estos últimos sectores.

II. *Contradicciones esenciales dentro de la Unidad Popular*

1. *Romper el dogmatismo a través de la crítica*

Para examinar la crisis política durante el gobierno Popular y, por consiguiente, las causas históricas de su derrocamiento, existen dos dimensiones de análisis. Una es examinar los factores externos, es decir, la acción coordinada del imperialismo norteamericano y las fuerzas políticas de la burguesía

¹⁰ Recuérdese el cuartelazo intentado por el general Viaux, el cual, finalmente, fue sofocado por la propia indecisión de éste para tomar el poder en octubre de 1969.

chilena, para derrocar a un gobierno que, mediante una política de transformaciones estructurales en la economía, ponía en peligro su dominación de clases. En efecto, la nacionalización del cobre, de los bancos, la expropiación de los monopolios y la aceleración de la reforma agraria hasta casi terminar con el latifundio, fueron un intento serio de abolir las relaciones de producción capitalista. Al mismo tiempo, este proceso de cambios era acompañado de una participación obrera y campesina en el mismo, de carácter considerable. Éstas son causas más que suficientes para impulsar a las fuerzas reaccionarias a un golpe de Estado.

Pero las causas del derrocamiento de Allende no sólo se pueden encontrar en esta acción *externa* a la clase obrera y los partidos marxistas, sino también existe la necesidad histórica de analizar la otra dimensión: *la interna a la Unidad Popular*.

Lo que ocurrió en Chile fue que el proceso de cambios estructurales y el intento, *por vía legal*, de transformar las relaciones de producción capitalista que inició la Unidad Popular provocó tal agudización y enervamiento de las contradicciones sociales que no podía terminar más que con un enfrentamiento abierto y armado de los dos sectores sociales en pugna (guerra civil) o en un golpe de Estado. Que se haya dado la última solución y no la primera y, más aún, que no hubiera habido guerra civil con victoria del proletariado no se debe sólo a la acción del imperialismo y la burguesía, sino que también es el resultado de las fallas de *la estrategia y la táctica empleada por la Unidad Popular en la coyuntura*. Lo que queremos decir, en otras palabras, es que la victoria de las fuerzas reaccionarias con su golpe militar se debe tanto a la fortaleza, cohesión y organización de la burguesía y la acción del imperialismo, como a las *flaquezas, división y desorganización de la Unidad Popular*.

Tal como lo afirma Mao,¹¹

Cuando dos ejércitos se traban en lucha, uno resulta vencedor y el otro vencido: la victoria de uno y la derrota del otro son determinadas por causas internas. Uno es el vencedor ya sea por su poderío superior o por su correcto mando; el otro es derrotado ya sea por su debilidad o por su comando incompetente: las causas externas actúan a través de las causas internas. En 1927, la gran burguesía china derrotó al proletariado, aprovechando el oportunismo que existía entonces dentro del proletariado chino (dentro del Partido Comunista de China). Cuando eliminamos ese oportunismo, la revolución china recuperó su vuelo. Más tarde, la revolución china volvió a sufrir serios golpes de sus enemigos, a causa del aventurerismo, que apareció dentro de nuestro partido. Cuando eliminamos el aventurerismo, nuestra causa volvió a reanudar su avance. Así pues para conducir la revolución a la victoria, un partido político debe basarse en la justeza de su línea y en la consolidación de su organización.

¹¹ Mao Tse Tung, *Cuatro tesis filosóficas*, 3ª ed., México, Ediciones de Cultura Popular, 1973.

Desde este punto de vista llama la atención la carencia de análisis posteriores al golpe militar de los teóricos de izquierda¹² respecto a los desaciertos estratégicos y tácticos cometidos por la Unidad Popular durante el tiempo que fue gobierno, lapso histórico en el cual se va gestando el golpe de Estado acaecido, pero cuya alternativa bien pudo haber sido un enfrentamiento armado de clases. Este último proceso, si bien es cierto era de desenlace imprevisible, aparecía como una oportunidad para que el proletariado conquistara el poder político de salir victorioso en la contienda.

Esta insuficiencia crítica revela una conformidad en relación a la vigencia histórica de la estrategia y la táctica adoptadas por la Unidad Popular durante la coyuntura en que fue gobierno. Es la creencia de que la conducción política que esta agrupación de partidos le dio a las masas fue la correcta, la que descansa, en último término, en una actitud dogmática, en la medida que no se somete a la revisión autocrítica por parte de sus mismos impulsores, o sea, los partidos políticos de la UP y los especialistas en ciencias sociales comprometidos con la ideología marxista.

Si se quiere escapar del dogmatismo, una revisión minuciosa de lo que aconteció en Chile y, más específicamente, lo que se denominó "la vía chilena al socialismo", debiera ser la orden del día de los militantes de la izquierda y sus intelectuales.

2. *Las causas internas que determinaron el golpe militar*

Nosotros nos proponemos, en las páginas que siguen, analizar justamente las causas internas a la Unidad Popular que dieron origen al golpe y que facilitaron la acción de las causas externas.

En páginas anteriores ya esbozamos las líneas estratégicas distintas que caracterizan a los dos partidos marxistas de la UP, las cuales tenían su explicación en los sectores del proletariado que representaban. El Partido Comunista reclutaba más adherentes en el proletariado que vinculábamos a las empresas más modernas desde el punto de vista del desarrollo económico, y el Partido Socialista aparecía con un electorado más heterogéneo pero más radicalizado, por ser sectores de masas (obreros, campesinos y subproletarios), que sufrían en forma más cruenta la explotación capitalista.

Estas líneas políticas divergentes se expresaron en la política seguida por el gobierno de la Unidad Popular, la cual adquiere un sesgo ondulante, debido al carácter diverso que los dos partidos le atribuían tanto al proceso

¹² De los pocos trabajos publicados, destacan las reflexiones de Alain Touraine, por la objetividad con que trata los acontecimientos que relata y el intento de explicarse la división política de la Unidad Popular tratando de entender la división social que caracteriza a los sectores asalariados chilenos. Es igualmente interesante el énfasis que hace de las contradicciones del sistema político chileno (en el cual se desenvuelve la UP) regido por la legalidad burguesa y la base social (Poder Popular). Alain Touraine, *Vida y muerte del Chile popular*, México, Siglo XXI, 1974.

político que se vivía como a la interpretación, también distinta, del programa y, por consiguiente, de su aplicación.

Para el Partido Comunista, el gobierno de la Unidad Popular sólo es una etapa: se trata de *consolidar la revolución democrática burguesa*. El programa no tiene un carácter socialista y, por lo tanto, se debe aplicar tratando de no agudizar las contradicciones de clase y, en lo posible, aislar a la oligarquía terrateniente, a la burguesía monopólica y al imperialismo de las clases medias, a las que el gobierno Popular deberá favorecer en su política económica para lograr su apoyo. Debe respetarse, estrictamente, la legalidad burguesa.

Los socialistas, por su parte, plantean que el programa de la Unidad Popular está destinado a "iniciar la construcción del socialismo", el cual se iría generando durante la práctica de gobierno con el apoyo y la participación de las masas. El gobierno debe procurar modificar, mediante su acción, las relaciones de producción capitalistas para con las masas generar una estructura económica socialista. El legalismo burgués debe respetarse en lo posible, pero no descartar las acciones ilegales como respuesta a la violencia derechista.

Sin embargo, iniciadas las funciones de gobierno, es notable una clara división en el actuar político de los militantes socialistas. Mientras la mayoría de los funcionarios socialistas se adaptan al enfoque con que el gobierno visualiza el proceso, los militantes encargados por el partido de trabajar en los frentes de masas adoptan una postura más radicalizada, sobre todo aquellos que se vinculan a los organismos del Poder Popular. En general, esto ocurre con los militantes de casi todos los partidos de la Unidad Popular, con excepción de Radicales y Comunistas.

Es posible visualizar dos frentes de acción política en el seno de la Unidad Popular. Por un lado, está el gobierno, apoyado ideológicamente por el Partido Comunista y el Partido Radical; por el otro, militantes de los partidos MAPU, Izquierda Cristiana y Socialista, que se incorporan al trabajo político de los Consejos Comunales Campesinos o a los organismos encargados de controlar el problema del abastecimiento y a los Cordones Industriales. Esta división, que casi no se expresa teóricamente sino más bien se observa en la práctica política, va a ser determinante en el resultado con que finaliza la crisis política: el golpe de Estado militar.

Esta hipótesis la trataremos de desarrollar en las páginas siguientes, al estudiar los errores en que incurre el gobierno de Salvador Allende durante su gestión.

Para analizar los errores teóricos y prácticos más relevantes, es necesario estudiar algunos casos concretos. Para esto nos parecen importantes los problemas del abastecimiento, de la política agraria y del poder popular y sus relaciones con la burocracia.

3. *Distorsiones en la estructura de la distribución*

Una de las principales acciones contrarrevolucionarias que implementó la burguesía en contra del gobierno de la Unidad Popular y el proletariado, fue

provocar una grave distorsión en la estructura de distribución de artículos de primera necesidad y bienes de consumo en general. En este boicot, colaboraron las empresas distribuidoras privadas y los comerciantes, lo que acarreó escasez en los mercados establecidos y, por consiguiente, la creación de mercados paralelos donde los productos se vendían a precios desorbitantes en relación a los oficiales fijados por el gobierno. Contribuía a este proceso especulativo la existencia de una masa de circulante monetario que sobrepasaba en mucho lo previsto por el gobierno, incrementándose así la demanda de bienes de consumo.

El exceso de circulante y su contrapartida, escasez de productos, se explicaba, en primer lugar, por el aumento de salario (100 por ciento respecto al alza del costo de la vida) decretado por el gobierno para contrapesar la inflación, unido al incremento de las prestaciones a los sectores asalariados y jubilados, montepiados, etcétera. Esto implicaba mayor poder adquisitivo de las masas y, por tanto, mayor demanda, la cual no podía ser satisfecha enteramente por la estructura productiva nacional.

En segundo lugar, existe una reticencia del sector empresarial a destinar sus capitales a la inversión. Por el contrario, los destinan a especular en el mercado o, simplemente, aumentan sus stocks con el propósito de crear escasez.

Ante esta situación, el gobierno de la Unidad Popular, para evitar la especulación y el agio con productos de primera necesidad, decidió intervenir las empresas distribuidoras de productos alimenticios, las cuales pasaron a ser controladas por la Secretaría Nacional de Distribución creada al efecto. Al mismo tiempo, nacen las Juntas de Abastecimiento y Precios (JAP).

Estos últimos organismos estaban constituidos por vecinos de distintas comunas (o sectores geográficos), encargados de la distribución de los productos, actuando coordinadamente con las empresas de distribución requisadas y con la Secretaría Nacional de Distribución. A cada familia se le entregaba una cuota de alimentos de acuerdo a sus necesidades.

Sin embargo, rápidamente se observaron conflictos entre las JAP y los comerciantes, ya que el control de la distribución impedía que éstos acapararan productos y los volcaran en los mercados paralelos. La idea del gobierno era que las JAP actuaran coordinadamente con los comerciantes, pero —en la mayoría de los casos— el sistema funcionó con gran oposición o, por decirlo claramente, con el boicot práctico de los comerciantes. Así, en los barrios obreros y populares surgieron contradicciones agudas entre las masas organizadas en las JAP y los comerciantes, debido a que el control de éstas sobre los últimos implicaba una merma de sus ganancias al impedirles vender clandestinamente.

Por otra parte, en sectores de población marginal, donde casi no existía comercio establecido y donde vivía la gente más pobre de Chile (poblaciones callampás), los pobladores demandaron un sistema de distribución directa por parte del gobierno.

Éste, sin embargo, por intermedio de la Secretaría Nacional de Distribu-

ción, controlaba apenas el 30 por ciento de los productos distribuibles.¹³ De esta cantidad, casi toda se comerciaba a través de la JAP, no pudiendo el gobierno satisfacer las exigencias de distribución directa que demandaban los sectores más pobres, sobre todo, debido al interés de la Unidad Popular de no perjudicar a sectores que se vinculaban socialmente a la clase media. Surgen, de este modo, contradicciones en el seno de la izquierda ante los dos sistemas alternativos de distribución que se proponen: el *sistema de la JAP* y el *de la distribución directa*.

4. *Sistemas contradictorios en la distribución*

El primero implicaba una colaboración de las masas organizadas en las JAP con los comerciantes, la cual fue, en la mayoría de los casos, conflictiva. Por eso, las JAP funcionaron en forma deficiente, demandando al gobierno mayor independencia en su función fiscalizadora respecto a la distribución. En muchos casos, las JAP enclavadas en sectores obreros y populares, descontentas por las escasas atribuciones que les confería el Decreto que organizaba su funcionamiento, solicitaron su inclusión en el sistema de "Distribución Directa". Lo que solicitaban las masas organizadas eran atribuciones para sancionar a los comerciantes, pero estas sanciones quedaban, por ley, en manos de las autoridades competentes. Las JAP sólo tenían inspectores sin facultades para requisar mercancías y aplicar multas; sólo estaban facultados para denunciar a los acaparadores ante la Dirección de Industria y Comercio. De allí su ineficacia para impedir el agio y el acaparamiento.

El sistema de la "Distribución Directa" significaba entregarle al pueblo organizado la solución del problema de la distribución, el cual, dada la agudización de la lucha de clases, no podía resolver el Estado. Este sistema implicaba la *participación política directa de las masas organizadas en la gestión económica*, eliminando la ingerencia del Estado en la distribución y afectando, de paso, los intereses de un sector económico (los comerciantes), que el conflicto social había puesto en contradicción a los del pueblo. En otras palabras, lo que se pedía del gobierno era que él entregara los productos de consumo al pueblo organizado para que éste, mediante sus organizaciones, los distribuyera de acuerdo a las necesidades de cada familia afiliada a las JAP (o ante cualquier otro mecanismo que se creara para tal efecto) y, al mismo tiempo, que las masas tuvieran organismos efectivos ante el acaparamiento y el mercado negro; es decir, dominio *político popular sobre los sectores sociales contrarrevolucionarios*, que atentaban contra la alimentación del pueblo.

¹³ Sobre todo, porque el gobierno de la UP no expropió todas las empresas de distribución particulares. Además, muchas de ellas eran pequeñas empresas, a las cuales era difícil controlar. Igualmente, los canales de distribución y comercialización de productos agrícolas, no siempre son controlados por el Estado; para hacerlo se contaba con la cooperación de los campesinos beneficiados por la reforma agraria, pero éstos muchas veces desviaron la producción de frijol, papa, trigo y otros productos al mercado negro, creado por la burguesía; lo mismo ocurrió con la carne.

Por otra parte, la burguesía, utilizando los medios de difusión, agitó políticamente a las clases medias en contra de las JAP y el sistema de "Distribución Directa", tratando, de este modo, que el gobierno les quitara su apoyo. Al mismo tiempo, la burguesía pretendía que las Juntas de Vecinos (organismos que en los barrios de clases adineradas y de sectores sociales medios eran controlados por los partidos Demócrata Cristiano y Nacional), también distribuyeran alimentos, entrando en competencia con las JAP. Presionado el gobierno por todas las instituciones y organismos del Estado contrarios a su gestión y temeroso de perder fuerza en las clases medias, cedió, entregándole atribuciones parecidas a las de las JAP a las Juntas de Vecinos, por lo que en barrios aristocráticos y de clases medias con altos ingresos se dio la paradoja que existieran sistemas de distribución popular, donde se sabía que todo el mundo acaparaba y se abastecía en el mercado negro (Comunas de Las Condes, Providencia y Ñuñoa en Santiago, por ejemplo). Esta situación hizo que la cuota de alimentos, destinada a las poblaciones populares, fuera decreciendo y que escasearan aún más los productos de primera necesidad.

Como el problema se fue agravando con el correr de los días, en el seno de la Unidad Popular y en las masas se suscitó una polémica aguda respecto al desarrollo del sistema de "Distribución Directa". Mientras el MIR y sectores del Partido Socialista abogaban por la implementación de este último, el gobierno y el Partido Comunista defendían el de las JAP.

La política gubernamental, al provocar reacciones violentas en los sectores populares, acarreó tomas de empresas estatales de distribución como DINAC y Agencia Graham, así como fuertes presiones y manifestaciones de repudio, dividiendo al pueblo y, por lo mismo, provocando fisuras en la Unidad Popular.

Es posible extraer, de lo expuesto, algunas conclusiones:

1. En la medida que se les dio a las masas populares la oportunidad de controlar la distribución (aunque fuera a medias) y el consumo, *surgieron contradicciones inevitables entre éstas y los comerciantes*, producto de intereses económicos entre sectores de clases distintos: el sector de la pequeña burguesía comerciante y los obreros, campesinos y pobladores pobres, en general.

2. Al resultar ineficiente el sistema de control vía JAP, propuesto por el gobierno, las masas populares organizadas demandaron un sistema más eficaz de control del agio y del mercado negro. El gobierno, deseoso de no quebrantar la legalidad vigente y, al mismo tiempo, de no crearse enemigos en las clases medias, mantuvo el sistema de distribución que partía del supuesto de que era posible la colaboración entre comerciantes y el pueblo organizado.

La distribución directa implicaba una socialización del consumo en Chile y la posibilidad de afianzar la organización popular y unir fuerzas en torno del gobierno; de aceptar éste dicho sistema. Pero la Unidad Popular prefirió acentuar la división social que se perfilaba claramente antes de aplicar un sistema de distribución y control que lo enemistara con la pequeña burguesía.

5. Controversia sobre organización del área rural expropiada

En cumplimiento de su programa de gobierno, la Unidad Popular inició, apenas asumido el Poder Ejecutivo, la aplicación de la reforma agraria,¹⁴ la cual desde el punto de vista de las expropiaciones de predios realizadas en conformidad a la ley¹⁵ logró abolir los latifundios de una superficie mayor a 80 hectáreas de riego básicas (HRB).

Este solo hecho, de extraordinaria importancia histórica, ya que significaba la erradicación de la estructura productiva latifundista, creó dos tipos de problemas que el gobierno no supo resolver: uno de ellos se refiere al de organizar el proceso productivo en términos de elevar la producción agrícola de acuerdo con las exigencias de una mayor demanda de productos agropecuarios; el otro se relaciona con la canalización de las fuerzas revolucionarias al proceso de agitación política que provocó la misma reforma.

En otras palabras, se trataba de organizar el proceso de trabajo en los centros productivos expropiados y de buscar un sistema de participación política de los campesinos favorables a los intereses revolucionarios de la Unidad Popular.

Ante esta probabilidad, se notó claramente en los partidos de la Unidad Popular una división respecto de la forma de resolverla, producto de distintas versiones ante la coyuntura política o, mejor dicho, acerca de la etapa revolucionaria que se desarrolla en el gobierno Popular.

Para los partidos Comunista, Radical, MAPU Obrero-Campesino y los grupos de la Izquierda Cristiana incorporados a los organismos del agro (Corporación de la Reforma Agraria, Instituto de Desarrollo Agropecuario, etcétera), la reforma agraria se hacía para elevar la producción y terminar con el latifundio, causante del retraso económico y social del campesino respecto al habitante urbano. Al mismo tiempo, la estructura agraria resulta una rémora para el proceso de desarrollo económico pendiente en Chile. Respecto a la organización del trabajo en las unidades expropiadas, éste se concebía dando margen a excedentes repartidos entre los campesinos pertenecientes al predio, los cuales, además, serían dueños de sus tierras mediante títulos conferidos por el Estado. No demostraba este polo político de la Unidad Popular

¹⁴ Para un panorama completo de lo ocurrido en el agro y lo realizado por el gobierno Popular, véase Barraclough, S. y Fernández, J. A.: *Diagnóstico de la reforma agraria chilena*, México, Siglo XXI, 1974.

¹⁵ El gobierno de Allende expropió para octubre de 1972, con fundamento en la Ley de Reforma Agraria vigente desde el gobierno de Eduardo Frei, 3 440 predios, con una superficie de 5 355 000 hectáreas. Las cifras han sido obtenidas del libro *La economía chilena en 1972*, elaborado en el Instituto de Economía y Planificación de la Facultad de Economía Política de la Universidad de Chile, editado por el mismo instituto en Santiago. Hay que aclarar que en el libro de S. Barraclough y J. A. Fernández, citado, las cifras son algo inferiores a las asentadas aquí. Sólo se dan por expropiados 3 282 predios. Ello se debe a que en el libro del Instituto de Economía, se incluyeron los predios expropiados hasta octubre de 1972, en cambio Barraclough y Fernández manejan datos sólo hasta julio del mismo año, no considerando la actividad expropiatoria en los meses posteriores.

lar intenciones de generar relaciones de producción socialistas, sino más bien la de *modificar* las capitalistas ya existentes, eliminando el latifundio y, con eso, "democratizar el agro", acondicionándolo al proceso de transformaciones estructurales que se iniciarían bajo el gobierno de la Unidad Popular. Los campesinos liberados de la explotación latifundista, a la cual se la caracterizaba más como pre-capitalista que capitalista, deberían ser aliados importantes de los obreros: grupo social conductor de la revolución chilena.

Esta interpretación no era compartida, en la Unidad Popular, por el Partido Socialista y sí atacada por el MIR, desde afuera. Para estos partidos, la lucha de clases en el agro se daba entre una burguesía (latifundista o no) y sectores sociales explotados (minifundistas, obreros agrícolas, migrantes en busca de trabajo, campesinos, etcétera). La única bandera para unir a estos sectores contra el enemigo burgués era la del socialismo. El proceso de reforma agraria se concebía como un intento de implantar relaciones de producción socialistas con carácter dominante en el campo chileno. El problema productivo se resolvería junto al político, porque lo que entorpecía la producción era el enfrentamiento de clases en el campo. Por lo tanto, mientras subsistiera el capitalismo agrario, con o sin latifundio, no se restablecería la producción a sus niveles normales.

El Partido Socialista, siguiendo esta doctrina, dio la batalla por la implantación de los Centros de Reforma Agraria (CERAS) y por darles a los Consejos Comunales Campesinos un papel de vanguardia en el proceso político.

Los CERAS, organismos productivos creados por la Unidad Popular, de inspiración socialista e institucionalizados mediante un acuerdo del Consejo de la Corporación de la Reforma Agraria, de 20 de agosto de 1971, se idearon como organismos de trabajo colectivo, uso común, de los instrumentos de trabajo y distribución parcial del excedente productivo entre los trabajadores. El resto de ese excedente estaba destinado a un "Fondo de Capitalización Comunal", con el cual se propendería al desarrollo agrícola de toda una comuna. Además, los CERAS se conformarían con la unión de varios predios expropiados, para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos productivos mediante una planificación agrícola comunal, llevada a la práctica por los propios campesinos.

En realidad, la concepción de los CERAS era de carácter socialista y estaba destinada a imponer nuevas relaciones de producción en el agro: propiedad social, trabajo comunitario y comercialización hecha a través de los organismos estatales. Se pretendía incorporar al trabajo productivo de los CERAS a la inmensa masa migrante de asalariados temporales (los cuales no tienen trabajo y ubicación fija de residencia productiva, sin duda, de la existencia del minifundio, el cual no es capaz de alimentar al campesino y su familia siquiera al nivel de subsistencia).

6. Indefinición acerca del papel político del campesinado

Con el propósito de crear un organismo de participación política de los distintos sectores agrarios se dictó el Decreto Supremo No. 481 del 6 de enero

de 1971, el cual reglamentaba el funcionamiento de los Consejos Comunales Campesinos. Este Decreto fue enriquecido posteriormente con el acuerdo de la Comisión Nacional Agraria de la Unidad Popular, que los definía como "organismos por medio de los cuales todos los sectores campesinos participan unitariamente en la planificación, ejecución y control de la política agraria y de las otras políticas que interesen a los campesinos" (artículo primero de la resolución citada). En otros términos, se trataba de organismos que fueran remplazando, en el transcurso del proceso, las funciones que la ley le atribuía al aparato agrícola estatal para echar las bases, de este modo, de *un poder popular socialista en el campo chileno*.

Pero en la práctica, ni los Centros de Reforma Agraria ni los Consejos Comunales Campesinos funcionaron como estaban concebidos, por una razón simple: había entre los partidos políticos de la UP una *división profunda respecto al papel* que les correspondía jugar en el proceso político agrario.

Por un lado, estaba la concepción socialista, apoyada desde fuera de la Unidad Popular por el MIR, la cual logró que tanto los Consejos como los CERAS se planificaran de acuerdo a la estrategia política de este partido. Por el otro, la comunista, similar a la de los otros partidos de la Unidad Popular, los cuales lograron en la práctica imponer su criterio de que los cambios en el agro debían ser paulatinos y encaminados a lograr una mayor productividad agrícola, asegurando, al mismo tiempo, el apoyo de los sectores sociales beneficiados por la reforma agraria. Así, sólo unos pocos Consejos Comunales Campesinos fueron representativos de los distintos sectores sociales agrarios. Por el contrario, los Consejos tendían a organizarse sobre la base de los sectores sindicalizados en el campo: inquilinos de latifundios radicados en los predios que iban siendo expropiados. Pero los asalariados migrantes en muy pocas ocasiones se sintieron representados en los Consejos, debido a que por su situación migratoria, excluida del proceso productivo, no tenían posibilidades de acceso a los sindicatos y Consejos para exponer sus demandas.

Igualmente, al formarse los CERAS, fue imposible incorporar a estos aparatos productivos todos los sectores sociales agrícolas, constituyéndose los Centros con sólo los campesinos que vivían en los predios expropiados. Éstos se opusieron sistemáticamente a que se incorporaran extraños al proceso de trabajo que podrían disputarles la apropiación de los excedentes productivos.

Los funcionarios de los partidos Comunista, Izquierda Cristiana y MAPU, encargados de aplicar desde los organismos estatales la política agraria del gobierno, apoyaron implícitamente estas posiciones de los campesinos beneficiados por la reforma, temerosos de perder su apoyo político, perjudicando así a otros sectores sociales, excluidos del proceso: población minifundista y migratoria.

Los socialistas, apoyados por el MIR, trataban de crear CERAS y Consejos Comunales que sirvieran a los intereses de los sectores sociales más desplazados, entrando en contradicción con la política hegemónica de la Unidad Popular y aplicada burocráticamente por el gobierno. De allí que no sea extraño observar, durante todo el periodo de la Unidad Popular, ocupaciones masivas de predios (que ocurrían a diario) y Oficinas Fiscales por parte

de campesinos descontentos con la política agraria y, sobre todo, por el burocratismo de los funcionarios, que impedía la participación activa de los campesinos en el proceso de expropiaciones y en la política agraria en general. En estas manifestaciones de protesta, casi siempre participaban campesinos desplazados por la reforma agraria y que, por lo tanto, exigían mayor participación en la misma, siendo en la mayoría de los casos respaldados políticamente por socialistas y militantes del Movimiento Campesino Revolucionario (Frente Político del MIR en el campo).

La división política en la Unidad Popular era producto de una *división social* entre los campesinos por la aplicación de la reforma agraria: mientras se tiende a favorecer a los campesinos sindicalizados y adscritos a relaciones de trabajo permanente, margina a los asalariados sin trabajo estable y a minifundistas, entre los cuales estaba la población de las reservaciones indígenas. El primer sector era representado, en forma mayoritaria, por el Partido Comunista (sin desconocer la presencia del Partido Socialista en los sindicatos); el segundo, por los socialistas y el MIR, que tienden a organizar y movilizar a los campesinos migrantes.¹⁶

Esta división, en el seno de la Unidad Popular y de las fuerzas revolucionarias, determina, como consecuencia lógica, la imposibilidad de superar el problema agrícola en su integridad. Además, impide el establecimiento de una línea homogénea, por parte de la Unidad Popular, frente a los problemas agrarios, sobre todo respecto a la indispensable campaña ideológica de subversión de una ideología campesina que se apodera de muchos sectores beneficiados con la reforma, los cuales tienden a imitar, en cuanto al trabajo productivo, a sus antiguos patrones y a campesinos de los asentamientos (unidades productivas creadas por la Democracia Cristiana, durante el tiempo en que fue gobierno, las cuales se caracterizan por el dominio jurídico de los campesinos respecto a la tierra que trabajan). Esta campaña ideológica era necesaria, por cuanto, en muchos casos, los campesinos que recibían tierras para su trabajo se adaptaron al funcionamiento del capitalismo dominante. No fue raro observar cómo muchos campesinos, beneficiados con la reforma agraria, contrataban para el trabajo mano de obra asalariada (al más puro estilo burgués) y preferían vaciar sus productos, en busca de mayores ganancias, en mercados paralelos, contribuyendo al desabastecimiento y a la existencia del mercado negro: herramientas especulativas que la burguesía usó para derrocar al gobierno de la Unidad Popular.

¹⁶ Es notable constatar el incremento de la votación electoral del Partido Socialista en las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, respecto a las zonas agrícolas, donde logra movilizar e incorporar a los Consejos Comunales Campesinos sectores agrícolas descontentos con la aplicación de la reforma agraria. En efecto, en zonas agrícolas pertenecientes a la provincia de Cautín (donde existe población indígena), Colchagua, Melipilla, etcétera, logra aumentar su votación, producto de su política agraria más radical. Los datos del resultado electoral de marzo de 1973 los hemos obtenido del trabajo de Herbert de Souza, "Las Elecciones Parlamentarias de Marzo de 1973", "Borrador para una Discusión Interna" copia mimeográfica, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Escuela Latinoamericana de Sociología (FLACSO, 1973).

Por otra parte, la política del gobierno (mejor dicho la inexistencia de una política efectiva de organización y movilización campesina), acentuó la división social estructural que existía en el agro chileno, imposibilitando la creación de un frente revolucionario que fuera capaz de luchar en forma efectiva al lado de los trabajadores urbanos, para evitar el golpe de Estado y por la creación de un Estado socialista.

7. Una alternativa revolucionaria: poder popular

A medida que se incrementa la lucha de clases en Chile, las masas obreras y populares se dan cuenta que los sindicatos no bastan para enfrentar con éxito la ofensiva contrarrevolucionaria de la burguesía. Así, cuando en octubre de 1972 la burguesía y sus fuerzas aliadas intentan derrocar al gobierno, iniciando un *lock out* generalizado, la clase obrera responde apoderándose de las industrias paralizadas y organizándose territorialmente, para defenderlas e incorporarlas al proceso productivo, pero en ese momento, bajo la dirección de los propios obreros. Surgen, de este modo, los *Cordones industriales*.

Éstos se yerguen como organismos de poder de la clase obrera, planteándose como *alternativos al Estado capitalista* por amplios sectores proletarios, advirtiéndose que ni el gobierno Popular, ni los sindicatos, en momentos decisivos de la lucha de clases, son capaces de superar el orden legal burgués y pasar a formas superiores de lucha.

Pero en cuanto al carácter y la función que los Cordones industriales y el poder popular juegan en la coyuntura del gobierno de la Unidad Popular, se percibe una discrepancia profunda en las fuerzas sociales de izquierda y en los partidos revolucionarios.

Para el gobierno y sus cuadros burocráticos, apoyados por el Partido Comunista y el Partido Radical, el poder popular no se concibe sino como una forma de apoyo a la acción política gubernamental y sindical, encuadrada dentro de la legalidad vigente. En cambio, sectores de los partidos Socialista, MAPU e Izquierda Cristiana, que no se vinculan directamente al aparato administrativo oficial, sino que trabajan políticamente en los frentes de masas, tienen una concepción (junto al MIR) de un poder popular independiente del gobierno y los sindicatos.

Y en verdad no podía ser de otro modo, ya que subordinar el poder popular al gobierno, como se pedía, significaba subordinarlo al funcionamiento jurídico del Estado capitalista que el gobierno, como Poder Ejecutivo, representaba; en otras palabras: la muerte del poder popular como alternativa revolucionaria. De allí que los sectores políticos de la izquierda marxista, dentro y fuera de la Unidad Popular, bregaran por mantener este poder socialista en gestación al margen de las acciones gubernamentales.

Por otra parte, los sindicatos no representaban una alternativa revolucionaria frente a la burguesía, por su propia dinámica interna *burocratizada*. En efecto, los sindicatos tenían una estructura piramidal, dependiente de la Cen-

tral Única de Trabajadores (CUT), por lo que sus vinculaciones eran de orden vertical. No existiendo vinculación entre obreros de distintos sindicatos, sino por medio de sus dirigentes sindicales y siempre mediante ramas industriales: los obreros de la construcción, por ejemplo (separados geográficamente en todo el país), sólo podían vincularse a través de sus dirigentes, y éstos, a su vez, con los dirigentes de otras agrupaciones económicas. Por lo tanto, los sindicatos impedían *toda comunicación obrera* que no fuera a través de sus dirigentes y menos permitían una vinculación territorial entre obreros de distintas industrias afines. Además, los sindicatos estaban fuertemente burocratizados, con dirigentes que, en vez de representar a las masas obreras, más bien representaban a distintos partidos políticos, a cuya elección los obreros concurrían sólo con su voto. Las políticas sindicales las dirigían las élites de los partidos mediante sus comisiones sindicales, la masa obrera, en realidad, quedaba excluida de la toma de decisiones en los asuntos de su interés. Y si aparentemente participaba en asambleas y elecciones, esta participación era formal.

No es de extrañarse entonces que ante la intensificación de la ofensiva contrarrevolucionaria, manifestada por el desabastecimiento y el acaparamiento de los productos de consumo, *lock out* y *boicot* a la producción, más una violenta campaña publicitaria, la acción parlamentaria, judicial y de todos los aparatos dominados por la burguesía, el proletariado buscara salir de la crisis a través de organismos más idóneos para detener la ofensiva antipopular.

Esta vía la encuentra el proletariado en los Cordones industriales, los cuales se estructuraron por *sectores geográficos en distintas ciudades de la república*, agrupando a la mayoría de las industrias de una zona industrial. Todos los acuerdos se tomaban en asambleas de delegados de las diferentes industrias que pertenecían al cordón y, por la cercanía geográfica de éstas, era posible que los acuerdos se comunicaran rápidamente a las bases obreras movilizadas. De esta forma, los Cordones industriales, carentes de una estructura burocrática, se convirtieron en instrumentos formidables de movilización política.

La preocupación fundamental de los Cordones industriales fue la movilización de los obreros para solucionar los problemas de abastecimiento, locomoción y defensa de las industrias ocupadas por las bases. Al mismo tiempo, se encargaron de gestionar las requisiciones e intervenciones de las industrias donde existían conflictos obrero-patronales. En este último aspecto, la acción de los cordones fue importantísima para la conformación del Área de Propiedad Social, ya que ante el *boicot* empresarial a la producción, fueron los obreros quienes denunciaron a los empresarios *boicoteadores*, presionando al gobierno para que requisara sus industrias.

No obstante, la existencia de estos organismos de poder popular, dio origen a conflictos con los sindicatos y el gobierno. En cierta manera, los Cordones industriales aparecen ante los dirigentes sindicales como organismos políticos superpuestos a su autoridad, debido a que los trabajadores de una fábrica, estando sindicalizados, se incorporaban a los Cordones industriales. Aparecían, pues, sujetos a dos direcciones políticas, ya que no siempre la política sindical

coincide con la de los cordones. En efecto, mientras los sindicatos están más cerca de los objetivos de la acción gubernamental (la cual hemos descrito como más sujeta a la legalidad burguesa y donde predominan grupos burocratizados), los cordones reclaman *autonomía* en relación al gobierno, en la medida que se plantean como órganos de poder alternativos al *estado capitalista*. Agréguese a lo anterior la existencia de sindicatos (adheridos a la CUT) cuyos dirigentes eran democratacristianos, de ideología burguesa y políticamente contrarios a la Unidad Popular. De allí, los continuos conflictos entre la práctica sindical y la de los cordones.

8. *El poder popular entra en contradicción con el gobierno*

También son de ordinaria frecuencia las contradicciones entre el poder popular y el gobierno.

En los párrafos anteriores examinamos las contradicciones entre el gobierno y las organizaciones encargadas de controlar la distribución. Así también las contradicciones entre éste y sectores sociales en el campo, descontentos ante la forma en que se aplicaba la reforma agraria. Decíamos, además, que esas contradicciones eran provocadas por el actuar político administrativo del gobierno, que acentuaba la existencia de diferencias socioestructurales en el proletariado, respecto a su inserción en el sistema productivo: un proletariado adscrito a las industrias "dinámicas" en el proceso de desarrollo económico y otro a las más "tradicionales". Igualmente, destacamos el hecho de que es este proletariado marginal el que se presenta más crítico ante la política de distribución del gobierno y, al mismo tiempo, que los sectores rurales desplazados de la reforma agraria fueron los que más violentamente la impugnaron. En ambos casos, el repudio por la forma en que es conducido el proceso de vigilancia de la distribución y la reforma agraria (y no en contra de ambas medidas), se manifiesta en ocupación de establecimientos públicos (y de terrenos, en el caso de la reforma agraria), así como en declaraciones de crítica al *burocratismo estatal*.

Tratándose de los Cordones industriales es perceptible, de igual modo, las contradicciones entre el actuar de éstos y el gobierno. La causa inmediata de conflictos son las requisiciones e intervenciones de empresas privadas que van a configurar el Área de Propiedad Social de la Economía (APS). Mientras las masas de los cordones tienden a incorporar al mayor número de empresas de un sector geográfico, para así incrementar su poder como organismos de representación popular, el gobierno tiende a controlar sólo aquellas industrias que considera de carácter monopólico o estratégico para la economía.

Por ello, mientras los cordones, día a día, ocupaban más industrias privadas, el gobierno tendía a frenar esta acción desquiciadora del poder económico burgués, sobre todo cuando estas acciones sobrepasan los planes fijados por el gobierno, escapando a su control.

La contradicción se agudiza, además, por el hecho de que los cordones es-

tán políticamente impulsados y, en muchos casos, dirigidos, por militantes de los partidos más radicalizados adentro y fuera de la Unidad Popular; esto es, del Partido Socialista, del MAPU y del MIR, a quienes el Partido Comunista y la burocracia gubernamental acusan de poseer "desviaciones ultraizquierdistas" y de querer sobrepasar el programa de gobierno. No obstante, en octubre de 1972 cuentan los Cordones industriales con todo el apoyo del gobierno para detener la ofensiva contrarrevolucionaria de la derecha, pero al pasar la crisis van perdiendo ese apoyo, hasta llegar a los días anteriores al golpe de Estado, cuando se vive una crisis parecida a la de octubre, en la cual es poco lo que los cordones pueden hacer, al no contar con las facilidades que tuvieron para movilizar a las masas.

En el fondo, la contradicción se produce por el hecho de que el gobierno canaliza sus acciones por medio del aparato del Estado, utilizando las leyes y reglamentos propios de éste, quedando entregado a las masas sólo el papel de *respaldar* esa acción gubernamental. Pero el Estado (y, por tanto, el gobierno), se rige en su acción por normas legales que le facultan para actuar, y estas normas, *por regla general*, tienen una dinámica y una relación interna de clase que reflejan la dominación burguesa contenida en las relaciones de producción de una sociedad que, como la chilena, está dominada por un modo de producción capitalista dependiente. Por otro lado, su aplicación está entregada a tecnócratas y burócratas (que en su gran mayoría no eran militantes de la Unidad Popular), quienes también, en cuanto tales, poseen internalizada una ideología capitalista.

Por lo tanto, en la aplicación de las leyes, decretos y reglamentos administrativos por los cuales se rige el Estado, los burócratas y tecnócratas adscritos a ese aparato no hacían otra cosa que aplicar la ideología burguesa de una manera *acorde* con esa ideología, en la medida que ellos también estaban dominados por ella.

De este modo, la aplicación de normas legales burguesas, por intermedio de burócratas y tecnócratas, tenía que chocar forzosamente con las aspiraciones reivindicativas, económicas y políticas de la clase obrera y asalariados proletarios en general, sectores que se rigen por *otra ideología* que responde a sus propios intereses, sobre todo la de aquellos proletarios más desplazados por el sistema capitalista. En este problema vemos la causa última de las contradicciones entre la acción de las masas y la burocracia.

El uso del aparato del Estado por el gobierno, en la solución del problema del abastecimiento, la aplicación de la reforma agraria y las requisiciones e intervenciones de industrias, pone frente a frente al poder popular y al gobierno, provocando divisiones políticas en la Unidad Popular (las cuales repercuten a su vez en el propio gobierno), acentuando las contradicciones sociales en la masa proletaria, en cuanto hay sectores obreros más beneficiados que otros por la acción del gobierno.

Mientras el gobierno actuaba apegado a las normas legales burguesas, en el poder popular existía la convicción de que la solución de la contradicción principal entre la burguesía dependiente y el proletariado, estaba en la generación de un Estado proletario, durante la coyuntura del gobierno de la Uni-

dad Popular, lo que implicaba la destrucción del aparato del Estado burgués (y su ejército) y la delineación de un desarrollo táctico acorde a ese objetivo. Para ello, había que dejar de lado el Programa de la Unidad Popular y orientar la acción del gobierno por otros rumbos.

9. *Comportamiento de los partidos respecto a estas contracciones*

Con esta posición estaban amplias capas de militantes socialistas, del MAPU, la Izquierda Cristiana¹⁷ y el Movimiento de Izquierda Revolucionario, particularmente aquellos militantes de estos partidos que trabajaban políticamente en los organismos de masa.

Por la aplicación del Programa de la Unidad Popular, exclusivamente a través de la acción del gobierno, se inclinaban el Partido Comunista y sectores de los partidos incorporados a las labores gubernamentales. También se percibe la adhesión irrestricta al gobierno del Partido Radical, de orientación ideológica socialdemócrata.

En la práctica, descontando la adhesión a la acción política del gobierno del Partido Radical y del Partido Comunista, los demás partidos de la Unidad Popular se dividen frente a la dinámica social que conlleva el proceso de cambios.

Esta *división práctica* es producto de la inserción de los militantes de estos partidos en distintos frentes; unos cumplen funciones de gobierno y otros trabajan en los frentes de masas. Los que se insertan en la maquinaria gubernamental *se adaptan prácticamente* al funcionamiento burocrático, siendo diferente su concepción del proceso de cambios. Los que van a hacer política en el seno de los organismos del Poder Popular son, por lo general, estudiantes que todavía no están preparados para el cumplimiento de labores "técnicas" o "profesionales" o activistas obreros que tampoco tienen preparación para ejercer cargos públicos de nivel medio, los cuales se empapan de esta *conciencia proletaria socialista* que caracteriza a las masas populares durante el gobierno de Allende y, por lo tanto, van a tener una posición política más a la izquierda de la Unidad Popular.

Esta pugna, derivada de varias alternativas ante la crisis, llega incluso a dividir definitivamente al MAPU en dos partidos distintos: el MAPU Obrero-Campesino, fracción más cercana a la acción política del gobierno, y el MAPU, encabezado por su secretario general, Óscar Guillermo Carretón, más cerca de las posiciones sustentadas por el MIR. En los demás partidos, la crisis no llega a dividirlos como instituciones, pero se refleja en la acción de sus militantes inscritos en uno u otro frente de trabajo político.

Las únicas organizaciones de izquierda donde no se perciben divisiones son

¹⁷ Sin embargo, frente al problema agrario, como lo hemos visto, no se nota esta misma agrupación de fuerzas. Allí, en la Izquierda Cristiana y el MAPU, al no tener contingentes considerables de militantes en las masas agrarias, predomina la acción de los burócratas de estos partidos enquistados en los organismos estatales.

los partidos Comunista y Radical. El primero, si bien es cierto no estaba exento de fricciones internas, mantenía una línea clara y homogénea de apoyo al gobierno, siendo el principal sostén ideológico del actuar de la burocracia gubernamental. Se explica la no manifestación de las contradicciones internas, que sin duda las tenía por la disciplina férrea de sus militantes, dada por su efectiva organización interna.

El Partido Radical se mantiene en una posición de claro e indiscriminado apoyo a la acción gubernamental, más bien porque su militancia es ideológicamente socialdemócrata, estando inscrito dicho partido en la II Internacional. Por eso, el legalismo de que hacía fe el gobierno calzaba perfectamente con su ideología.

Ante la división interna de los partidos más a la izquierda en la Unidad Popular y que los imposibilitaba, en la práctica, para desarrollar y encauzar el proceso político y la acción del gobierno por otros rumbos que no fueran la sujeción irrestricta de éste a la legalidad burguesa, la hegemonía en la conducción política del gobierno debía gravitar en torno a los partidos Comunista y Radical, coadyuvada por la ideología de la burocracia.

La oposición de izquierda, por decirlo así, dentro de la Unidad Popular, quedó prácticamente vacante y entregada sólo a los organismos de masas. La posibilidad de desarrollar una estrategia destinada a evitar el golpe de Estado y orientar una salida revolucionaria a la crisis política se veía coartada por esta situación.

III. *¿Por qué el gobierno Popular no pudo remontar la crisis?*

1. *La desviación economista del gobierno de la Unidad Popular*

¿Por qué el gobierno no fue capaz de solucionar favorablemente la crisis?
¿Cuáles son las bases teóricas sobre las cuales es posible hacer una crítica ante el fracaso de los sectores que encauzaron la acción del gobierno y que fue corroborado por el golpe de Estado?

Se puede criticar la acción del gobierno de Allende desde muchos ángulos. Pero, por sobre todo, teóricamente se le puede acusar de *economismo*, el cual conlleva una serie de desviaciones que son palpables a la primera ojeada: reformismo, burocratismo y, por consiguiente, abandono de una política de masas, más una apreciación incorrecta respecto a la política de alianza de clases.

Como es sabido, el economismo consiste básicamente en limitar la acción política en el plano económico, despreciando otras instancias de acción, principalmente la ideológica y la política propiamente dicha. En este caso, el economismo se manifestó, por parte del gobierno de la Unidad Popular, en el hecho de que haya diferido el problema de la conquista del *poder político*, cuando justamente era necesario abordarlo.

Lenin, en “¿Qué Hacer?”,¹⁸ nos ha legado el “concepto” de la desviación economista. Así, acusando a Mártov y a los demás desviacionistas y oportunistas en la Social Democracia rusa, denuncia el olvido de que la tarea de todo revolucionario es *desarrollar la conciencia política de la clase obrera con miras a la destrucción del Estado capitalista*.

La Social Democracia representa a la clase obrera no sólo en su relación con un grupo determinado de patronos, sino en sus relaciones con todas las clases de la sociedad contemporánea, *con el Estado como fuerza política organizada*; se comprende, por tanto, que los Social Demócratas no sólo *no pueden circunscribirse a la lucha económica*, sino que ni siquiera pueden admitir que la organización de las denuncias económicas constituyen su actividad predominante. Debemos comprender activamente *la labor de educación de la clase obrera, de su conciencia política*.¹⁹

Asimismo,

La Social Democracia Revolucionaria siempre ha incluido y sigue incluyendo en la órbita de sus actividades la lucha por las reformas. Pero utiliza la agitación “económica” no sólo para reclamar del gobierno toda clase de medidas, sino también (y en primer término) para exigir que deje de ser un gobierno autocrático. Además, considera su deber presentar al gobierno esta exigencia *no sólo* sobre el terreno de la lucha económica, sino de la vida social y política. En una palabra, como la parte al todo, subordina la lucha de las reformas a la lucha revolucionaria por la libertad y el socialismo.²⁰

En el caso de la Unidad Popular, ésta poseía el gobierno y, por lo tanto, la tarea era *no solamente* usar este instrumento para hacer reformas económicas, sino también utilizarlo para la agitación política revolucionaria. En otras palabras, emplear los vastos medios monetarios, materiales y a los funcionarios adictos a la UP que dispone el gobierno. La tarea era *movilizar y organizar a las masas*. Unir al pueblo mediante una política de distribución que le entregara a éste *el control efectivo* del acaparamiento y del mercado negro, y no entregárselo a organismos supervigilados por un nuevo organismo burocrático (Secretaría Nacional de Distribución), los cuales, por añadidura, suponían la colaboración con los comerciantes, verdaderos paladines del agio y la especulación. Se trataba de incorporar a todos los sectores sociales campesinos a los Consejos Comunales, creando organismos productivos de carácter socialista en el agro y no marginar a los sectores rurales más explotados de la reforma agraria, como los minifundistas y asalariados migrantes. Era necesario volcar todos los recursos gubernamentales en el impulso, organiza-

¹⁸ Lenin, “¿Qué hacer?”, en *Obra escogidas*, tomo 1, Moscú, Ed. Progreso, pp. 117 y ss.

¹⁹ *Ibid.*, p. 164.

²⁰ *Ibid.*, p. 169.

ción y movilización de los Cordones industriales y no restarles su apoyo, cuando éstos pretendieron erguirse en un poder independiente del gobierno (y por tanto, al Estado). En fin, la función real del gobierno de la Unidad Popular para la revolución era la creación de un *poder popular* que se alzara como una alternativa al poder capitalista. El gobierno pudo haberse convertido, a no ser por su economismo, en un "caballo de troya" para el Estado capitalista.

Claro que los sectores vinculados a la acción gubernamental siempre van a esgrimir, como pretexto de su inconsecuencia revolucionaria, que lo anterior era impracticable por la presencia de las fuerzas armadas como guardianes del capitalismo. Pero este argumento representa sólo una verdad a medias.

Si bien es cierto que en el golpe de Estado la burocracia armada se presenta "casi"²¹ unida para derrocar al gobierno de Allende, se nota en la Unidad Popular un marcado "reformismo-legalista" en la forma de encarar, desde los inicios, el problema que para la revolución significaban las fuerzas armadas. Si bien, en *teoría*, la política programada por la Unidad Popular ante los cuerpos militares durante la coyuntura revolucionaria era realista, en la práctica se implementó apegada a un legalismo reformista e inconsecuente a los fines del proletariado. Según Pío García,²² la situación se puede resumir de la siguiente manera:

Pero si el golpismo pudo imponerse entre los uniformados no fue sólo debido a situaciones políticas globales como las aludidas, sino también a los defectos de concurrencia con que se practicó la política de la Unidad Popular respecto a las FF. AA.

La política militar de la Unidad Popular buscaba la neutralización de los Institutos Armados, hasta que el acrecentamiento de las convicciones constitucionalistas y el enriquecimiento de su contenido en correspondencia con el proceso de transformaciones revolucionarias permitieran su sujeción a un nuevo Estado de diferente carácter. Se trataba pues, también aquí, de una cuestión de correlación de fuerzas, en un medio de tendencia de suyo hostil, pero que ofrecía condiciones relativamente favorables. Tal cometido no podía alcanzarse sin afrontar las contradicciones internas que necesariamente suscitaría, para profundizarlas procurando su resolución favorable, y no rehuirlas. Se trataba, de hecho, de destruir el carácter burgués de las FF. AA., valiéndose del apoyo en la legitimidad del gobierno y la presencia de las masas organizadas.

La misma permanencia del gobierno Popular por casi tres años, la marcada aquiescencia de las FF. AA. durante toda una primera etapa, la ampliación de los sectores constitucionalistas y hasta de simpatías hacia la Unidad Popular entre mandos (por lo menos del Ejército y Carabineros)

²¹ Sobre la división de las fuerzas armadas el día del golpe, véase García Pío, "Prólogo", en *Las fuerzas armadas y el golpe de Estado en Chile*, México, Siglo XXI, 1974, p. XLV.

²² García Pío, *op. cit.*, pp. XLVII-XLIX.

y tropa, aun cierto compromiso alcanzado en cuanto a la concepción sobre el desarrollo nacional entre militares y la Unidad Popular, que simbolizó la persona del general Prats, probaron la factibilidad de esta política.

Sin embargo, en su aplicación práctica, la política militar sostenida no pareció hallar en estos hechos base para su desarrollo consecuente; antes bien, ellos aparentemente reforzaron el "legalismo" de la Unidad Popular para propender a un tratamiento de las FF. AA. librado a la convicción de su comportamiento profesional y constitucionalista *per se*. El "legalismo" se prestó así para la renuencia en el ejercicio de facultades legales y la persecución de actividades ilegales; para que se procurara la realización del mito del "apoliticismo" de las FF. AA. y no la dilucidación en un sentido favorable de sus opciones políticas.

El gobierno de la Unidad Popular fue con seguridad el que en menor medida durante los últimos decenios removi6 o llamó a retiro oficiales, como podía hacer según sus facultades. Los mandos superiores fueron siempre establecidos no de acuerdo a su calificación por el gobierno, sino a las precedencias de las jerarquías internas de sus cuerpos. Cuando se detectaron conspiraciones, actividades sediciosas o incluso cuando cristalizaron en sublevaciones, se tendió a encararlas como problemas internos de las FF. AA. tolerándose la disimulación de sus conexiones políticas, la investigación insuficiente de sus ramificaciones entre los propios uniformados y hasta el tratamiento irrisoriamente considerado de sus responsables. No es aceptable atribuir estos hechos a limitaciones impuestas por la misma correlación de fuerzas existente en los Institutos Armados. El 29 de junio mostró que se trataba más bien de una inclinación de la política, pues ese día, derrotados militarmente los insurrectos, asilados en una Embajada sus más flagrantes mentores, movilizados los trabajadores, no caben dudas de que se suscitó una coyuntura táctica extremadamente favorable, que pudo aprovecharse para aventar a fondo las tendencias golpistas alojadas en las FF. AA.

Se subvaloró por otra parte la trascendencia negativa que representaba la mantención de las vinculaciones castrenses con los cuerpos armados de EE. UU., canales abiertos para el alimento material de la insurrección, un sistema de inoculación permanente de una estrategia de defensa encaminada a prevenir el ataque extracontinental de las potencias socialistas y combatir al "comunismo" como enemigo interno. La vigencia de la ideología militar del imperialismo no podía resultar inocua para la preservación de una mentalidad reaccionaria en los oficiales formados en ella. La ingerencia insuficiente en el desarrollo específicamente militar de una concepción autóctona, inhibió incluso la posibilidad de enriquecer las convicciones constitucionalistas con un contenido nacional que alcanzara sus implicaciones de clase, manteniéndolas en un plano de formalismo jurídico y lealtades personales que se revelaron débiles para sostener su expresión concreta cuando la situación se hizo crucial.

La política ante las FF. AA. se resintió sin duda por causa de las diferencias que en particular a su respecto se acusaron en la Unidad Popular y la izquierda, por la incapacidad de definir una actividad suficientemente homogénea y consistente, y traducirla en acciones globales que involucran al pueblo y sus organizaciones, por la insuficiente consideración que mereció

la cuestión de las FF. AA. en tanto no se precipitaron los problemas que arrastraban en ellas.

El texto citado es suficientemente elocuente, evitándonos repeticiones.

Ha queda claro, al tratar tres problemas básicos que afrontó el gobierno, el desabastecimiento, la reforma agraria y el trato al poder popular, cómo el economismo de la Unidad Popular, con su secuela de reformismo legalista, influyó para que se acentuaran divisiones estructurales en el seno del pueblo, impidiendo la unificación de estos sectores bajo una dirección política de vanguardia que los condujera a la revolución. ¿Que esta política conducía a Chile a la guerra civil? Es cierto. ¡Pero si ése era, precisamente, el único camino de salida favorable para el proletariado, en la crisis política! ¿Y no es acaso la *guerra civil armada*, la única forma hasta ahora conocida de conquistar el poder político por el proletariado? ¿De qué otra forma se podía entender que el gobierno de la Unidad Popular debería echar las bases para "iniciar la construcción del socialismo", como se especificaba en su Programa? Evidentemente, esa iniciación de la construcción del socialismo no podía desembocar sino en una guerra civil de clases, mediante la cual el proletariado debía de conquistar el poder político. El olvido por parte de los sectores hegemónicos en el gobierno de que el poder no se conquista sino con las armas fue determinante para la derrota que la clase obrera sufrió en Chile.

2. Política de alianza de clases derivadas del economismo

El economismo de los sectores políticos hegemónicos en la Unidad Popular también se reflejó en la política de alianza de clases intentada realizar en la coyuntura.

El gobierno de la Unidad Popular dedicó grandes esfuerzos para tratar de modificar la estructura productiva chilena: eliminación del latifundio, adquisición de bancos y la creación de un Área de Propiedad Social en la economía. Pero esos cambios afectaron obviamente los intereses económicos, tanto del imperialismo extranjero, como de la burguesía en su conjunto. Era de esperarse, por lo tanto, la reacción política de esas clases sociales dominantes y afectadas de pronto en sus intereses. Para poder neutralizar esa oposición, que iba a tomar múltiples formas hasta desembocar en el golpe de Estado, era necesario acumular fuerzas sociales en torno al gobierno. Partiendo de la base de que a medida que se fuera aplicando el programa los sectores proletarios urbanos y rurales iban a adherirse a la acción del gobierno, éste trata de alterar la aplicación del programa con el intento de captarse, por lo menos, la neutralidad de la clase media y pequeña burguesía. Pero, para lograrlo, el gobierno respetará la legalidad vigente, en cuanto es consustancial a la ideología de los sectores medios. Este respeto a la legalidad va a ser la característica más prominente del gobierno y, al mismo

tiempo, su talón de Aquiles: le impide darle una salida revolucionaria a la crisis política, cuando la burguesía se aprestaba a quebrantarla con el apoyo, justamente, de la clase media y la pequeña burguesía.

Es fácil percibir que esta doctrina de gobierno era errónea: se basaba en el supuesto de que en Chile no podía hacerse la revolución *sin el apoyo* de la clase media, lo que implicaba negar la potencialidad revolucionaria del pueblo en conjunto.

La población estrictamente obrera en Chile sobrepasaba en 1965²³ el 40 por ciento de la población activa total. Si a los obreros añadimos el gran número de trabajadores por cuenta propia, que viven miserablemente y que constituyen en Chile el sector más marginado de la economía (habitantes de las poblaciones *callampas*), junto a los minifundistas y asalariados migrantes en el agro, más los campesinos en general, tenemos una inmensa masa proletaria que podía ser movilizada por un gobierno dispuesto a hacerlo. En cierta medida fue movilizad, pero por sectores de militantes de la Unidad Popular que no eran hegemónicos dentro de la combinación de gobierno. Ya vimos cómo el gobierno dio la espalda a esta movilización, en la medida que ella escapaba a su control, en los casos de la política de abastecimiento, la reforma agraria y el poder popular. Lo que buscaba el gobierno era un arreglo político para la crisis, mediante entendimientos con el Partido Demócrata Cristiano (el cual se visualizaba como representante de la clase media) o, cada vez que ésta se agudizaba más, incorporando miembros de las fuerzas armadas al gobierno.

En rigor, esta alianza de la Unidad Popular con la clase media y la pequeña burguesía era impracticable, por las *características de la misma coyuntura*, la cual puso, frente a frente, al conjunto del proletariado con los sectores medios.

La contradicción entre las masas obreras y asalariadas con la pequeña burguesía y, en general, con la clase media, tiene su origen tanto en factores económicos como ideológicos.

Los sectores medios dependientes económicamente de la burguesía. Así, los profesionales prestan sus servicios (sea en forma libre o contractual) a las empresas y consorcios capitalistas o, en su defecto, forman su clientela en los estratos de altos ingresos. De tal manera que una política, como la de la Unidad Popular, que atacara al gran capital, les afectaría indirectamente.

Por otro lado, los comerciantes se abastecen para la venta de artículos de consumo de los productos fabricados y distribuidos por las empresas capitalistas y, a su vez, los pequeños y medianos industriales obtienen sus insumos de las grandes empresas capitalistas encargadas de la fabricación de bienes intermedios o semimanufacturados. Se obtiene así una *dependencia* de estos sectores en relación a la burguesía monopolística, afectada por las reformas estructurales del gobierno: expropiaciones, requisiciones e intervenciones de esas empresas, la que si bien es objetivamente expoliatoria para

²³ Véanse los datos sobre la población activa, obtenidos del Censo de 1965, en Aranda y Martínez, en *Chile hoy*, op. cit.

la pequeña burguesía, no es aprovechada en cuanto tal por ella, por la fuerte adhesión de estos sectores a la ideología capitalista.

Uno de los efectos más importantes del proceso de industrialización y modernización del sistema capitalista es, justamente, la generación de una *ideología de consumo* en amplios sectores de la población, sobre todo por parte de los sectores medios, los cuales, influidos por lo que se ha llamado "efectos de demostración", tiende a imitar los patrones de consumo propios de clases de altos ingresos. Por lo tanto, la suprema aspiración de los sectores medios es vivir "con un *confort*" propio de la gran burguesía. De manera que esta dependencia económica de los sectores medios, respecto a la burguesía industrial y financiera, es sublimada por la admiración de estas capas *al modo de vida burgués*. En otras palabras, es la ideología capitalista de consumo la que les impide tomar conciencia de que sus objetivos a largo plazo son contradictorios con los de la burguesía. Por el contrario, *se imaginan* que esa dependencia es fundamental para su seguridad económica futura, por el simple hecho de que, carentes de proyectos histórico-económicos propios, piensan que desapareciendo el gran capital ellos también caerán arrastrados por aquél.

Esta ideología de consumo capitalista y el sentimiento de seguridad que le otorga al pequeño burgués su dependencia del gran capital, son cuestiones que hay que tenerlas en cuenta cuando se analiza el proceso de fascistización de estos sectores.

En Chile, a medida que la Unidad Popular tiende a destruir las relaciones de propiedad monopólicas, esta dependencia de la pequeña burguesía respecto a la clase dominante comienza a resquebrajarse. Por lo tanto, la seguridad de las capas medias se troca en inseguridad cuando van desapareciendo sus relaciones con las grandes empresas, para ser remplazadas por relaciones entre la pequeña burguesía y funcionarios del gobierno, encargados de la administración de las empresas expropiadas, los cuales eran, todos, militantes de los partidos de la Unidad Popular. Esta nueva relación entre funcionarios políticos y la pequeña burguesía ya no es igual a la anterior. La primera se establecía entre un gerente o relacionador público de una empresa capitalista con un pequeño burgués. La segunda se estructura entre un funcionario del gobierno con ideología proletaria y un pequeño burgués fuertemente penetrado por la ideología burguesa. De allí que sea contradictoria.

Además, los pequeños industriales y comerciantes ven que empiezan a escasear, día a día, sus insumos productivos en el caso del primero y sus artículos para la venta en el segundo, lo que favorece su sensación de inseguridad que provoca el proceso de cambios.

Por otra parte, en la medida que la Unidad Popular aplica su programa se desencadena la especulación y el mercado negro impulsado por la burguesía. Esto tiene como consecuencia una escasez de toda clase de artículos, lo que evidentemente *atenta contra la ideología de consumo* de la pequeña burguesía, la cual, al no poder satisfacer en el mercado sus aspiraciones de *confort* burgués, *siente* que el proceso de cambios afecta a sus intereses. Sen-

sación de frustración que se incrementa al disponer estos sectores de mayor poder adquisitivo, como producto del aumento de la oferta de dinero, el cual no puede gastar, sin embargo, en los mercados establecidos, dada la escasez general. El pequeño burgués va entonces a satisfacer su burguesa necesidad de consumo en el mercado negro, contribuyendo a su desarrollo y fortalecimiento. A su vez, el comerciante y el mediano y pequeño industrial, no sólo van a comprar al mercado paralelo, sino que también van a vender en él sus productos.

Ya vimos cómo esta actividad especulativa choca con los intereses del proletariado y de los pobladores, produciéndose contradicciones en la esfera del consumo entre estas dos clases.

Ideológicamente, la clase obrera y el pueblo aspiran a un Estado proletario de carácter socialista, donde puedan superar no sólo sus problemas inmediatos de orden económico, sino también detentar el poder político. La pequeña burguesía se siente atemorizada por este poder popular, porque su ideología es burguesa y económicamente ven peligrar su existencia al estar desvinculada del proletariado y ser dependiente de la burguesía. Ésta va a encontrar, durante el gobierno de la Unidad Popular, un aliado natural en la pequeña burguesía y un enemigo, también natural, en el proletariado.

Pero el economismo de los sectores más vinculados al gobierno impidió que éste advirtiera el problema en su dimensión real. Se insistió siempre, por parte de estos sectores, en una alianza con la pequeña burguesía y la clase media, no comprendiendo que dicho entendimiento era *impracticable*, debido a que la clase obrera y el pueblo, base de sustentación del gobierno Popular (a pesar de las contradicciones estructurales señaladas), tenía intereses opuestos a los de la pequeña burguesía y la clase media.

Los únicos sectores medios que se adhirieron a la política de la Unidad Popular, incorporándose a la labor de generar un poder obrero, fueron los sectores más pauperizados de la administración pública: trabajadores y empleados de remuneraciones bajas, verbigracia, salud, magisterio, etcétera, así como grupos de intelectuales y de estudiantes. Pero la clase media, en gran proporción, dióse a la tarea de provocar la caída del gobierno de Allende.

Una política de alianza de clases, consecuente con las reales contradicciones sociales que se perseguían en esa coyuntura, era la de crear un Frente Revolucionario Popular, con apoyo en la unificación de los sectores de clases más explotadas del capitalismo: *campesinos* (unificando todas sus fracciones a través de Consejos Comunales, vitalizados por una conducción hacia la toma del poder político junto a la clase obrera), *pobladores y obreros*, organizados por el poder popular. Pero el gobierno, sumergido en una práctica política economista, no vio esa posibilidad, o mejor dicho, no podía verla dado el propio economismo; y los sectores de izquierda de los partidos de la Unidad Popular no tuvieron la fuerza necesaria para implementarla.

3. Origen histórico de las desviaciones de los partidos obreros

Sin embargo, sería incorrecto denunciar el fracaso revolucionario (y transitorio, por lo demás) de las fuerzas de izquierda, solamente por las desviaciones de algunos de sus más connotados militantes en el gobierno (economismo). Estas desviaciones tienen su origen histórico y no son expresión de la *voluntad de esos militantes*.

Señalábamos, en las primeras páginas de estas notas, *el modo histórico específico* en que los partidos proletarios encuadran su acción política y, al mismo tiempo, hacíamos notar la importancia futura que habría de tener esta práctica política.

Veíamos que a partir del año 1932 los partidos obreros (Socialista y Comunista) optan por la vía electoral y el parlamentarismo, así como intentan participar, con relativo éxito, en gobiernos burgueses. Esto permitió el equilibrio político que caracteriza, en esas décadas, al capitalismo chileno.

Este modo específico de hacer política fortaleció la existencia de sindicatos, que representando a grandes masas obreras lograron hacer efectivas muchas demandas beneficiosas para su clase. Pero, al mismo tiempo, legitimó la existencia del Estado representativo burgués, facilitando la reproducción de las relaciones de producción capitalistas.

Las vanguardias obreras y los dirigentes de los partidos de izquierda, por lo tanto, se habían formado bajo las pautas de esta acción *encuadrada en la legalidad burguesa*. En su mayoría estos cuadros políticos, que conformarían la dirección de los partidos de la Unidad Popular, incorporándose a funciones de gobierno, no conocían otra práctica que la sindical o la parlamentaria. Duchos, por consiguiente, en maniobrar organismos burocratizados y en manipular clientelas electorales, se adaptaron al funcionamiento burocrático del gobierno, descuidando la política de masas.

Además, el equilibrio político chileno, hasta antes de 1970, tenía un costo social. Éste no era otro que el mantenimiento de masas explotadas en el campo y la marginación política de pobladores que habitaban barriadas pobres (trabajadores por cuenta propia, asalariados sin trabajo estable, etcétera). Son el campo y los sectores marginados de la ciudad los que soportan, en forma más cruenta, la explotación capitalista. Este olvido voluntario de la izquierda chilena respecto a estos sectores, estaba en función del mantenimiento de esta situación de equilibrio político, en la medida que aseguraba la participación en el sistema de obreros sindicalizados, los cuales tienden a establecer alianzas a través de sus partidos, con organizaciones políticas pluriclasistas (Partido Radical y Demócrata Cristiano) en su conformación social, pero con fuerte hegemonía interior burguesa. Esa tendencia a una política de alianzas con la burguesía propia de la izquierda chilena, primó también en el gobierno de la Unidad Popular, descuidando, como en el pasado, la política de masas tendiente a generar condiciones para la toma del poder.

Es sólo a fines de la década de los años 50, cuando el Partido Socialista plantea su estrategia del Frente de Trabajadores, que se notan fisuras im-

portantes en el seno de la izquierda respecto a la problemática del poder (manifestadas en las polémicas entre el Partido Socialista y el Comunista), que culminarán con la formación del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), en 1964, como consecuencia del descontento de los militantes que se situaban más a la izquierda de los partidos obreros tradicionales. La estrategia del Frente de Trabajadores planteaba la necesidad de unificar a los distintos sectores de clases mantenidos al margen de toda participación política, haciendo énfasis en la inviabilidad de una alianza de clases con partidos representantes de la burguesía y, al mismo tiempo, se especificaba que no había que descartar la lucha armada como vía para la toma del poder.

4. La práctica política reformista determina la derrota popular

Sin embargo, los dirigentes del Partido Socialista no aplicarán en la práctica la línea del Frente de Trabajadores durante el gobierno del presidente Allende y, si bien es cierto que hay discrepancias con el partido Comunista y con el gobierno, los funcionarios socialistas, encargados de labores administrativas, se ciñen a las pautas burocráticas de éste. Durante la administración del extinto presidente se crean las condiciones reales para la unificación popular en un Frente Revolucionario, pero el modo de acción política, apegado al economismo (y al legalismo parlamentario y sindical) de los cuadros de los partidos políticos que se incorporan a labores de gobierno, van a frustrar esa posibilidad. Además, los cuadros más radicalizados de esos partidos (y del MIR) que se incorporan al trabajo de masas, no van a tener la fuerza suficiente, dentro de sus partidos y ante el gobierno, para imponer una estrategia distinta.

Así, la práctica política del gobierno y los sindicatos lograron refrenar los impulsos revolucionarios de las masas organizadas en Cordones, Consejos Comunales Campesinos y organismos de Distribución Directa. Se impone en el gobierno una conducción burocratizada y legalista tratándose de superar la crisis política mediante entendimientos superestructurales con partidos burgueses, política que acentúa, en vez de unificar, las divisiones estructurales del proletariado chileno.

Éstas son las causas internas, en los términos de Mao, que posibilitaron la acción de las externas: ofensiva de las fuerzas capitalistas, financiadas y respaldadas por la CIA y el imperialismo norteamericano, la cual va a desembocar en el golpe de Estado.

Así como el gobierno de Allende es la culminación de un proceso político democrático burgués, la tiranía militar es consecuencia de la inmadurez teórico-política de la clase obrera que se manifiesta en el mismo gobierno popular. Inmadurez teórica, representada por el economismo en su gobierno e imposibilidad de las fuerzas revolucionarias, dentro y fuera de la Unidad Popular, para generar una vanguardia capaz de guiar a las masas hacia la conquista del poder político.